

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 117
O R D I N A R I A
LUNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del lunes cinco de noviembre de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública extraordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se incorporó en el transcurso de la sesión.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número ciento dieciséis, extraordinaria, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el cinco de noviembre de dos mil doce:

II. 1. 782/2011 Amparo en revisión 782/2011, promovido por *****, y otras, en contra de la resolución de 21 de diciembre de 2010, del Secretario de Comunicaciones y Transportes, a través de la cual se resuelve el recurso administrativo de revisión interpuesto en contra de la resolución contenida en el acuerdo P/EXT/020409/34, emitido por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por *****, ***** y *****, por conducto de su representante legal, *****, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisados en la sentencia de primera instancia. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, ***** y *****, todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, en contra del acto reclamado y autoridad responsable referidos en el considerando primero de este fallo constitucional”*.

La señora Ministra ponente Luna Ramos señaló que el proyecto fue elaborado conforme a los precedentes relativos a los amparos en revisión 240/2011, 644/2011 y 190/2011, en tanto que se combate una resolución del Secretario de Comunicaciones y Transportes dictada en un recurso de

Sesión Pública Núm. 117 Lunes 5 de noviembre de 2012

revisión promovido en contra de una determinación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de interconexión, al considerarse que dicho Secretario carece de competencia para resolver un recurso de esta naturaleza, indicando que reiteraría su voto en contra del sentido mayoritario.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó que estaría a favor del sentido del proyecto. Preciso que, no obstante, en cuanto a los efectos del amparo, el proyecto se elaboró conforme a lo resuelto en el amparo en revisión 240/2011, por lo que este apartado debe modificarse en términos de lo que posteriormente se determinó en el diverso 644/2011, por mayoría de siete votos, en el sentido de que el amparo debe concederse para el efecto de que se remita el recurso de revisión al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que sea éste el que lo resuelva.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que iba a sugerir lo mismo que el señor Ministro Cossío Díaz, a fin de que los efectos del amparo no queden aparentemente indefinidos en este asunto.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que, en tanto que el proyecto fue realizado conforme al criterio mayoritario del Pleno frente al cual ha manifestado su oposición, votará en contra de la propuesta, por las mismas razones en que se apoyó al pronunciarse en los precedentes.

Sesión Pública Núm. 117 Lunes 5 de noviembre de 2012

La señora Ministra Luna Ramos indicó que realizará los ajustes al proyecto sugeridos por los señores Ministros Cossío Díaz y Aguilar Morales, al considerar que complementan la resolución.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que los ajustes son correctos en tanto que se apegan al precedente, señalando que votaría a favor del sentido del proyecto pero en contra de los efectos que plantean darse al amparo, al estimar que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no puede tener el carácter de titular para efectos de la resolución del recurso, en términos de las leyes aplicables.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas con salvedades en cuanto a los efectos, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero y Ortiz Mayagotia. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Valls Hernández y Presidente Silva Meza votaron en contra.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

II. 2. 816/2011 Amparo en revisión 816/2011 promovido por ***** y otra, contra actos del Congreso de la Unión y otras

Sesión Pública Núm. 117 Lunes 5 de noviembre de 2012

autoridades, consistentes en el artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: *“PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** y a *****, ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, por las razones y para los efectos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria”*.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales precisó que el proyecto se plantea en los términos en que se resolvió el asunto anterior.

En consecuencia, por unanimidad de diez votos se determinó reiterar la votación emitida al resolverse el amparo en revisión 782/2011, de modo que la propuesta del proyecto se aprobó por mayoría de seis votos de los señores Ministros Cossío Díaz, Franco González Salas en contra en cuanto a los efectos, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero y Ortiz Mayagotia, con el voto en contra de los señores Ministro Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Valls Hernández y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto.

II. 3. 1/2012

Solicitud 1/2012 de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica Del Poder Judicial De La Federación. En el proyecto formulado por el señor Ministro Luis María Aguilar Morales se propuso: *“ÚNICO. Debe prevalecer, en el caso, la resolución de once de julio de dos mil doce, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1782/2012”.*

El señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que, en aras de fomentar el acceso a la información pública, el presente asunto se listó para verse en la presente sesión, no obstante que de forma ordinaria asuntos de este tipo se resuelven en sesión privada.

Después de que se incorporó el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea al Salón de Plenos, el señor Ministro ponente Aguilar Morales señaló que la solicitud relativa a este asunto fue presentada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con la finalidad de que este Tribunal Pleno determinara los alcances de una resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en su concepto, constituye un impedimento para cumplir con la determinación mediante la cual se resolvió conceder la suspensión definitiva del acto reclamado en el juicio de amparo.

En estos términos, indicó que lo que se pretende es que este Alto Tribunal resuelva un conflicto surgido entre dos órganos del Poder Judicial de la Federación, señalando que el proyecto propone solucionarlo al declarar que en el caso debe prevalecer la determinación dictada por la referida Sala Superior, ya que el asunto se encuentra vinculado con la materia electoral y que, por tanto, dicho órgano jurisdiccional debe resolverlo en definitiva.

El señor Ministro Cossío Díaz, una vez que se refirió a la forma en la que el proyecto sustenta la competencia del Tribunal Pleno para conocer del asunto, indicó que los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal, que se invocan para sostenerla, se refieren básicamente a cuestiones relacionadas con la carrera judicial.

Señaló que, como algunos de los señores Ministros sostuvieron al resolverse el amparo en revisión 743/2005, no resulta tan claro determinar si es posible que en el juicio de amparo pueda conocerse sobre violaciones a los derechos políticos, indicando que la decisión tomada en ese asunto fue anterior a la reciente reforma al artículo 1º constitucional, y que la distinción entre garantías individuales y derechos políticos, que tuvo un sentido importante en la jurisprudencia del siglo XIX, en el marco de los debates entre los juristas Vallarta e Iglesias, resulta difícil de sostener a la luz de la reforma citada, dado que a partir de lo que dispone actualmente el artículo 1º constitucional puede considerarse

que los derechos políticos constituyen una modalidad de los derechos humanos.

Estimó que, tomando en cuenta la naturaleza de las resoluciones encontradas, el presente conflicto tiene carácter jurisdiccional puro y duro, por lo que debe resolverse conforme a las reglas previstas en el artículo 106 constitucional y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y no a partir de lo previsto en el artículo 11, fracción IX, de dicha Ley, indicando que las modalidades previstas en los artículos 94, 97, 100 y 101 constitucionales tienen otra naturaleza, fuentes y vías.

Reiteró que en términos de lo manifestado por algunos de los señores Ministros en el citado amparo en revisión 743/2005, no resulta tan claro que el juicio de amparo sea procedente para reclamar violaciones a derechos políticos electorales. Después de aludir al contenido de la tesis P. II/2007, del rubro: “DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES”, expuso que tendría dudas respecto de la constitucionalidad de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en la que se sustenta dicho criterio, señalando que no le es posible extraer algún elemento que lo lleve a sostener que la

definición decimonónica contenida en la tesis, relativa al concepto de derechos políticos, tenga un valor jurídico en términos de lo que actualmente dispone el artículo 1° de la Constitución Federal.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó en contra del proyecto. Señaló que lo dispuesto en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ha sido interpretado por el Pleno en otro asunto, del que derivó la tesis de rubro: “CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS PARA QUE SE ACTUALICE LA ATRIBUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA RESOLVERLAS, PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”, de cuyo contenido destacó que las controversias previstas en dicho precepto versan sobre aspectos institucionales relacionados con el adecuado funcionamiento de los propios órganos y no con aspectos que incidan de manera exclusiva en la esfera jurídica de sus titulares, siendo necesario, incluso, que la competencia para resolver este tipo de controversias no esté conferida en forma específica a un diverso órgano.

De esta forma, afirmó que uno de los requisitos de procedencia para el ejercicio de esta atribución por el Pleno consiste en que la materia sobre la que debe versar la controversia que se suscite entre órganos del Poder Judicial de la Federación se refiera a aspectos institucionales

vinculados con el adecuado funcionamiento de los propios órganos en el ámbito administrativo, a fin de garantizar la autonomía e independencia de los órganos que integran el Poder Judicial Federal, sin involucrar, por tanto, la resolución de conflictos de índole jurisdiccional, como es el caso, lo cual es acorde con el procedimiento legislativo que derivó en la expedición de la Ley Orgánica relativa en mil novecientos noventa y cinco, pues de éste se desprende la intención de conferir al Pleno de este Alto Tribunal facultades no jurisdiccionales en orden de velar por la autonomía e independencia mencionadas.

Consideró que el planteamiento que hace el Tribunal Colegiado, en su solicitud, involucra la pretensión de que este Tribunal Pleno resuelva un conflicto derivado del ejercicio de competencias por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral y dicho Tribunal Colegiado, en un caso concreto, en el que las determinaciones adoptadas por uno y otro órgano jurisdiccional resultan contradictorias para la autoridad encargada de su ejecución, de forma que lo que se pretende es que este Pleno resuelva una controversia de carácter jurisdiccional, al definir qué determinación debe prevalecer en el asunto, lo que se corrobora con el reencauzamiento del planteamiento y la decisión a que finalmente arriba el proyecto, siendo que el ejercicio de la atribución que se otorga al Pleno en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica no puede tener el alcance de resolver cuestiones jurisdiccionales que definan los criterios

jurídicos que deben prevalecer en un caso concreto, sino solamente cuestiones administrativas relacionadas con aspectos institucionales y de funcionamiento de los órganos del Poder Judicial que tengan por objeto salvaguardar su autonomía e independencia.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, tomando en cuenta que es un hecho notorio que el pasado treinta de octubre el cargo de presidente municipal que ostentaba el tercero perjudicado en el juicio de amparo ya culminó, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, y que la continuidad y permanencia en dicho cargo de esa persona es lo que realmente constituía la materia del juicio de amparo, cuestionó si la eventual sentencia que dirima el fondo de este juicio constitucional podría restituir al quejoso en el ejercicio de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados.

Consideró que, al margen de los interesantes criterios que podrían derivar de la discusión de este asunto, en tanto que pudieran delimitarse los alcances de la materia electoral para la improcedencia del juicio de amparo, y de lo que no lo es para los efectos del juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano, los pronunciamientos que pudieran realizarse no tendrían los alcances de influir en la

decisión del juicio de amparo, puesto que una eventual concesión de éste ya no podría surtir sus efectos protectores en tanto que precisamente el tercero perjudicado ya no podría volver a ocupar el cargo de Presidente Municipal de Monterrey que ostentaba, en la medida que éste cargo ya se encuentra ocupado por quien resultó electo en el pasado proceso electoral.

De esta forma, indicó que lo único que quedaría de materia en el asunto sería en realidad la suspensión, sin prescindir de que el treinta de octubre ya terminó el período para el cual fue electo el tercero perjudicado en el amparo y ya ocupa otro cargo, manifestando compartir las dudas sobre si existió o no violación a la suspensión.

El señor Ministro Aguirre Anguiano después de exponer la problemática del presente asunto y de destacar que implica que la autoridad responsable se encuentre ante el deber de cumplir dos resoluciones que se excluyen mutuamente, de manera que si cumple con una incumplirá con la otra, en tanto que estas decisiones derivaran de órganos jurisdiccionales diferentes del propio del Poder Judicial de la Federación, siendo además terminales en cada caso, señaló que este Alto Tribunal debe tener la competencia para resolver el presente conflicto jurisdiccional, hilvanando el fundamento teleológico de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Federal, pues de lo contrario se le despojaría a esta Suprema Corte de

Sesión Pública Núm. 117 Lunes 5 de noviembre de 2012

Justicia de su naturaleza de Máximo Tribunal del país y se pondría finalmente en un predicamento a los justiciables.

De esta forma, señaló que estaría a favor de la competencia del Pleno para resolver este asunto con fundamento en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalando que no podría ser en términos del artículo 106 de la Constitución Federal dado que en el presente caso no se plantea un conflicto de competencias normal, pues tanto el Tribunal Electoral como el Tribunal Colegiado actuaron en ejercicio de su competencia al dictar las resoluciones que se confrontan. Agregó que existen precedentes en los que este Alto Tribunal ha resuelto conflictos de naturaleza administrativa, por lo que en este caso debe indicarse que las atribuciones de este Alto Tribunal no solamente alcanzan para resolver problemáticas de esta naturaleza sino también para resolver conflictos jurisdiccionales.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que el asunto resulta complejo por las circunstancias que se han suscitado a su alrededor y que incluso han surgido posteriormente a la presentación del proyecto. Una vez que precisó los antecedentes del asunto, indicó que en el caso existe un conflicto entre órganos del Poder Judicial Federal, pero no tanto entre el Tribunal Electoral y el Tribunal Colegiado sino entre éste y el Juez de Procesos Penales Federales, al cual le fue consignado directamente el Ayuntamiento

responsable, encontrándose involucrado, incluso, el Consejo de la Judicatura Federal.

En este sentido, señaló que en realidad no se da un conflicto entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y el Tribunal Colegiado, pues simplemente siguieron dos vías distintas a través de recursos diversos que fueron bien o mal resueltos, de manera que la problemática concreta pudo haberse resuelto a través de los propios medios recusables sin necesidad de que llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agregando que el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en realidad no se refiere al tipo de conflictos como el que se plantea, por lo que en ese precepto no se establece la competencia para resolverlo. Estimó que, sin embargo, resultaría conveniente atraer el recurso de revisión que se interpuso en contra del auto del Juez de Distrito porque se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia.

En esos términos indicó que existen dos posibilidades de solución: la primera, relativa a declarar la procedencia del asunto, a fin de solucionar tanto el conflicto que se plantea entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Colegiado y el que se suscitó entre éste y el Juez de Procesos Penales Federales, y la segunda, relativa a establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para resolver este asunto en términos del artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y atraer el recurso de

revisión pendiente de resolverse por el Tribunal Colegiado, así como las diversas quejas que se interpusieron en el incidente de suspensión, siendo aplicables los diversos criterios de este Alto Tribunal en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, como la tesis P. XXVI/2003, de rubro: “INCUMPLIMIENTO INEXCUSABLE DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL ANÁLISIS QUE REALICE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA AL RESPECTO A FIN DE APLICAR LAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XVI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE COMPRENDER, EXHAUSTIVAMENTE, LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA EJECUTORIA, ASÍ COMO LAS DECISIONES EMITIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN”.

Indicó que en el conflicto entre el Tribunal Colegiado y el Juez de Procesos Penales Federales está en juego la independencia de éste, dado que aquél lo está obligando a dictar un proveído que corresponde a éste emitir en ejercicio de sus facultades, señalando que resultaría procedente atraer las quejas en materia de suspensión dado que existe el criterio del Pleno en el sentido de que aun cuando se sobresea en el juicio de amparo, si en éste se determinó la violación a la suspensión y se estableció la responsabilidad para las autoridades que incurrieron en ella, el tema sobre su responsabilidad subsiste.

El señor Ministro Pardo Rebolledo señaló que lo previsto en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del

Poder Judicial de la Federación, no constituye la vía idónea para entrar al análisis de la problemática planteada en el presente asunto, dado que en éste no existe una controversia entre las instancias que comparecen ante este Alto Tribunal, pues si bien las decisiones de éstos confluyen en un mismo punto, lo cierto es que derivan de procedimientos distintos.

Consideró que, tomando en cuenta que en la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se señala que las facultades previstas en su artículo 11, fracción IX, no tienen carácter jurisdiccional, no es dable estimar que resulte procedente analizar lo planteado en el proyecto con fundamento en dicha fracción, dado que en éste se estudia si el acto reclamado en el juicio de amparo conlleva una afectación a los derechos político-electorales, proponiéndose determinar que esta vía no era la procedente. Cuestionó cómo podría este Alto Tribunal, con fundamento en el precepto citado, dejar sin efectos las determinaciones tomadas por los órganos terminales en las instancias respectivas, sin existir un recurso formal de por medio.

Finalmente, indicó que el ejercicio de la facultad de atracción sería la vía idónea para entrar al análisis de los fundamentos esgrimidos por cada una de las autoridades involucradas, reiterando que la referida fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no

constituye un fundamento adecuado para hacer posible el análisis de la problemática planteada.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia señaló que el problema de las sentencias contradictorias nunca se ha visto como un conflicto entre órganos del Poder Judicial Federal, en tanto que la vía para unificar criterios es la denuncia de contradicción de tesis. Señaló que en el caso existe una contradicción de criterios a propósito de un mismo acto administrativo, a partir de que se analiza desde ópticas distintas, la del juez de amparo que señala que el asunto no es de materia electoral sino genéricamente administrativa, estando en juego derechos fundamentales de quien promueve el juicio de garantías, y la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la revocación de la licencia que había sido concedida al tercero perjudicado en el amparo y la orden para que éste reanudara sus funciones es un acto estrictamente electoral.

Agregó que en otros precedentes también se ha dado el caso de que existen dos decisiones que se excluyen indefectiblemente la una a la otra, señalando que nunca se ha planteado ello como un conflicto entre órganos del Poder Judicial, pues se llega a la solución con motivo de los recursos correspondientes que han llegado al conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia. Por ende, indicó que estaría a favor de la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos, que recoge lo manifestado en un primer momento por el señor Ministro Cossío Díaz, en el sentido de que el

presente asunto no se trata de un conflicto de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia en términos del artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues en el tipo de conflictos a que dicha fracción se contrae no puede abordarse la legalidad de decisiones firmes de los órganos que han ejercido jurisdicción en los casos concretos, de manera que si no se ha resuelto el recurso de revisión en cuanto al fondo del amparo, éste deberá de atraerse, así como las diversas quejas respecto de decisiones tomadas en materia de cumplimiento de la suspensión a fin de determinar cuál de las decisiones jurisdiccionales debe prevalecer.

Finalmente señaló que no se sumaría a que se emita un pronunciamiento en relación con el conflicto entre el Juez de Procesos Penales Federal y el Tribunal Colegiado, indicando que ante el Consejo de la Judicatura frente al cual quizá se mal encaminó el conflicto, se decidirá el problema derivado de que aquél negó la consignación indebidamente ordenada al parecer por dicho Tribunal.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que las quejas ya fueron resueltas, pero que el problema del cumplimiento subsiste, indicando que este Alto Tribunal puede conocer en torno a ello de acuerdo con las tesis que citó

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó sumarse a quienes han sostenido que la vía prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

de la Federación no es la idónea para resolver el enfrentamiento o incompatibilidad entre dos decisiones jurisdiccionales, debiendo estimarse, en consecuencia, que al resolver lo conducente, esta Suprema Corte de Justicia estaría ejerciendo una atribución jurisdiccional que no le otorga dicho precepto, y que si se llegara a considerar que se va a resolver dicha problemática como una cuestión competencial, sería aplicable el artículo 106 constitucional.

Asimismo, indicó que se separa de lo establecido en algunos precedentes en relación a que las atribuciones que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, están relacionadas con la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y con la independencia de sus miembros, considerando que el primer párrafo de dicho precepto, que establece la referencia relativa, no califica todas sus fracciones, máxime que la fracción IX establece una atribución para resolver conflictos entre órganos del Poder Judicial que tengan que ver con los artículos 97, 100 y 101 constitucionales.

En cuanto a las consideraciones del proyecto sobre la materia electoral, consideró que no comparte que el amparo, lisa y llanamente, sea improcedente tratándose de dicha materia, pues ni siquiera el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo lo establece en esos términos, si no que hace alusión a las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, de forma que para que el

amparo sea improcedente se requiere que el acto reclamado provenga de una autoridad electoral y que incida en dicha materia, manifestando tener dudas sobre la constitucionalidad de ésta y otras fracciones del citado artículo 73 de la ley de la materia.

De esta forma, señaló que no puede establecer de forma lisa y llana una división que distinga dónde empieza y termina lo electoral y cuándo procede y cuando no procede el juicio de amparo, pues ello debe analizarse a la luz de cada caso concreto, indicando que, sin embargo, en el presente caso no tiene que debatirse este problema, pues el conflicto jurisdiccional planteado no puede resolverse por vía del artículo 11, fracción IX, constitucional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza consideró que el asunto resulta ser de gran interés, en tanto que viene complicado por una actividad considerable en todos los campos involucrados: el amparo, la materia electoral, la disciplinaria y la materia penal. Señaló que, tal vez, los precedentes en los que se apoya el proyecto han tratado de resolver conflictos entre órganos jurisdiccionales, mas no a partir de sentencias definitivas, considerando que si bien diversas cuestiones ameritan un debate, lo cierto es que el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es la vía para resolverlas.

Agregó que tampoco resulta aplicable el artículo 106 constitucional, en tanto que las resoluciones que se

confrontan son definitivas, expresando que el criterio de la Segunda Sala en el sentido de que con motivo de un conflicto competencial puede afectarse la cosa juzgada escapa de la situación concreta y que estaría de acuerdo en que se decretara la atracción de lo que tuviera que atraerse, para que en su oportunidad se emitan los procedimientos que resuelvan las diferencias planteadas.

El señor Ministro Franco González Salas reconoció que, en principio, estaba a favor del proyecto en orden a que se encontrara una solución al problema que pudiera reiterarse en el futuro, pero que se ha convencido de que lo más convincente resulta ser lo propuesto por la señora Ministra Luna Ramos, en el entendido de que diferiría de algunas de las observaciones que se han apuntado sobre la procedencia del amparo, tomando en cuenta que el Constituyente, mediante la reforma de junio de dos mil once, introdujo en el acápite del artículo 107 de la Norma Fundamental la prohibición de que el amparo proceda en materia electoral, lo que a su juicio debe resolverse en cada caso concreto.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó que no ha soslayado la existencia del problema jurídico que subyace en el asunto, denotado por los integrantes del Tribunal Colegiado involucrado, indicando que el Tribunal Pleno no puede, so pretexto de resolver el asunto, desnaturalizar la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no es la vía procesal adecuada.

El señor Ministro ponente Aguilar Morales manifestó que sostendría la propuesta del proyecto. Indicó que para efectos del artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presente caso plantea un conflicto entre órganos del Poder Judicial Federal, dado que subsisten puntos de vista divergentes respecto de un mismo tema particular, señalando que no implica una contradicción de tesis porque esta implica pronunciamientos abstractos y no la resolución de una problemática particular.

Señaló que no está de acuerdo con que el presente asunto se refiera a un conflicto competencial en términos del artículo 106 de la Constitución Federal, pues ello podría actualizarse cuando diversos órganos tuvieran duda en torno a cuál de ellos corresponde conocer de un determinado asunto, siendo que el presente caso se refiere a un asunto resuelto por dos órganos, en donde si bien en el amparo no se ha resuelto el fondo, lo cierto es que ya resolvió en la suspensión e incluso hubo un pronunciamiento sobre la violación a esta medida cautelar.

Señaló que el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación procura que se alcancen soluciones en los casos particulares donde dos órganos del Poder Judicial Federal emitieron resoluciones

contradictorias, declarándose cuál de ellas es la que debe prevalecer

Por otro lado, indicó que el presente caso no se vincula con una cuestión de competencia jurisdiccional, pues no se llevó un procedimiento seguido en forma de juicio ni la Suprema Corte de Justicia ordenó presentar a alguien como acusado, actor o demandado, pues la resolución se constreñirá a determinar cuál de las resoluciones en conflicto debe prevalecer, sin menoscabar su importancia, relevancia y legalidad.

Manifestó que si bien no niega que en la materia electoral se involucren los derechos humanos, lo cierto es que la Constitución Federal decidió otorgarles una protección diferenciada mediante distintos órganos jurisdiccionales, indicando que no existe controversia en este sentido y que resulta justificable aplicar la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para resolver la problemática concreta, sin que ello implique decidir cuál de las resoluciones en conflicto es válida y cuál es inválida, de manera que se determine la prevalencia de una de ellas sin declarar la insubsistencia de la otra.

Finalmente, estimó que la atracción del asunto implicaría que este Alto Tribunal se pronunciara respecto de la validez o invalidez de la suspensión y sobre su cumplimiento o no, indicando que si el caso se resuelve en los términos planteados por el proyecto, se solucionaría

incluso el problema relativo al cumplimiento de la suspensión así como el conflicto entre el Tribunal Colegiado y el Juez de Procesos Penales Federales.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea señaló que si bien el Poder Revisor de la Constitución Federal ha establecido en su texto vigente que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral, no debe perderse de vista que no existe una definición unívoca e inalterable del concepto de electoral, siendo que existen casos frontera en los que debe decidir si se está o no en los márgenes de dicha materia, además de que en algún momento, el Tribunal Pleno se deberá pronunciar respecto del caso en que en la materia electoral está implicada una violación a derechos humanos, sin prescindir de que éste ha determinado que procede el juicio de amparo cuando exista una violación a otros derechos humanos, lo que a su juicio debe prevalecer al considerar que el Constituyente no pudo pretender que un conflicto en materia electoral, aunque conlleve violación a otros derechos humanos, no pueda ventilarse mediante el juicio de amparo, porque, en estos términos, tampoco tendría atribuciones el Tribunal Electoral para resolver sobre la violación a los otros derechos humanos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza hizo un recuento del sentido en que se han pronunciado los señores Ministros.

El señor Ministro Aguirre Anguiano señaló que el conflicto entre el Tribunal Colegiado y el Juez de Procesos Penales Federales no tiene naturaleza jurisdiccional, pues entre ellos no hay contienda, sino una pretensión de prevalencia de su opinión, indicando que, no obstante, la resolución de este Alto Tribunal sería claramente jurisdiccional, más que simplemente judicial.

Estimó que si bien otra opción sería atraer lo conducente, lo cierto es que no se justifica que la solución se postergue, dada la urgencia con que debe resolverse el caso, tomando en cuenta las actitudes que ha adoptado el Tribunal Colegiado.

El señor Ministro Cossío Díaz reiteró que este Alto Tribunal carece de competencia para conocer del caso y que la vía planteada no es la idónea para resolver este tipo de cuestiones, estimando más razonable la propuesta de la señora Ministra Luna Ramos, y que, por ende, en primer lugar podría votarse la procedencia del asunto y en segundo lugar sobre si se reasume o no la competencia.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó que el trámite de la violación a la suspensión ya fue resuelto, tan es así que se ordenó consignar a las autoridades que incurrieron en dicha conducta, por lo que en este aspecto no existe materia para atraer. Señaló que el tema del cumplimiento no tiene relación con el caso, y que está pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto en

contra del auto por el que el Juez de Distrito sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia.

Bajo este contexto, consideró que debe analizarse con calma lo que se atraerá, y que, por tanto, en este momento resultaría conveniente únicamente votar la competencia y la procedencia de la vía, de forma que se deje a una consideración posterior la pertinencia de ejercer la facultad de atracción de lo que se amerite.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que no tiene por qué constar en la resolución del presente asunto la atracción, pues ello se ha realizado vía acuerdos administrativos. De esta forma, indicó que si se determina que no procede el presente asunto, deberá instruirse a la Secretaría General de Acuerdos a fin de que pida los informes pertinentes a fin de verificar si podría atraerse el recurso de revisión pendiente de resolverse, en tanto que ya se decidió sobre la violación a la suspensión.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea coincidió en que resulta conveniente votar el proyecto y que la posible atracción se analice cuando se tengan todos los elementos para determinar, en sesión privada, qué es lo que se atraerá.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que de no aprobarse su proyecto, pedirá que se turne el asunto a uno de los señores Ministros de la mayoría a fin de que realice el engrose o una nueva propuesta.

Sometido a votación el proyecto, los señores Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza votaron en contra y por la improcedencia. Los señores Ministros Aguirre Anguiano y Aguilar Morales votaron a favor del proyecto y de la procedencia del asunto.

En consecuencia el asunto se falló conforme al siguiente punto resolutivo:

“ÚNICO. Es improcedente la presente solicitud de ejercicio de la facultad prevista en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito”.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, instruyendo a la Secretaría General de Acuerdos para que recabe la información suficiente a fin de determinar la atracción.

En virtud de este resultado, el Tribunal Pleno determinó retornar el asunto para la elaboración del engrose respectivo a la señora Ministra Luna Ramos, por así haberse ésta ofrecido, en la inteligencia de que dicho retorno computará como un turno para efectos estadísticos.

Sesión Pública Núm. 117 Lunes 5 de noviembre de 2012

La señora Ministra Luna Ramos indicó que haría suya la atracción en caso de que aún esté pendiente de resolverse el fondo del asunto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Pública Ordinaria que se celebrará el martes seis de noviembre del año en curso, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las trece horas con cinco minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.